

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**



Bogotá DC., seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Acción de Tutela No. 11001 40 03 035 2023 00965 00

Por ser procedente se admite la acción de tutela presentada por **IVÁN AGATON FANDINO** contra la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**. En consecuencia, se ordena:

1. Oficiar a la entidad accionada para que dentro del término de un (1) día contado a partir de la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los fundamentos de la demanda de tutela en su contra. A la respuesta deberá adjuntar la documentación pertinente. Adviértasele que ante la falta de respuesta oportuna se dictará sentencia de plano con base en los hechos de la demanda.

2. De igual forma, se ordena la vinculación del **SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO -SIMIT-**, para que dentro del mismo término informe lo que crea pertinente sobre la presente acción y defienda sus intereses. Ofíciase.

3. Notifíquese a las partes del contenido de la presente providencia por el medio más expedito.

Cúmplase,

La Jueza,

DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO

DS

Firmado Por:
Deisy Elizabeth Zamora Hurtado
Juez
Juzgado Municipal
Civil 035
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0fbd0dcdf71b5e64079f575fb573c8e551e56958992469af224f0830fec0ee91**

Documento generado en 06/09/2023 09:17:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**



Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CLASE DE PROCESO : ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE : IVÁN AGATÓN FANDINO
ACCIONADO : SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
RADICACIÓN : 11001 40 03 035 **2023 00965 00**

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, como quiera que el trámite propio de la instancia se encuentra agotado, sin la presencia de causal que invalide lo actuado.

I. ANTECEDENTES

Iván Agatón Fandino presentó acción de tutela contra la **Secretaría Distrital de Movilidad**, solicitando le sea amparado su derecho fundamental a la petición.

La *causa petendi* de la acción se fundamenta en los hechos que de manera concisa se citan a continuación:

1.1.- Indica el accionante que registra comparendo a su nombre y número de documento, por lo que mediante petición presentada el 5 de julio de 2023, se solicitó la exoneración de aquel.

1.2.- Que la Entidad emitió respuesta, negando la solicitud, frente a lo cual argumenta el actor no se notificó en debida forma la orden de comparendo.

I. TRASLADOS Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Una vez admitida la acción de tutela mediante auto de fecha 6 de setiembre de 2023, se ordenó la notificación de la accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa sobre los hechos alegados. De igual manera, en esa providencia, se dispuso vincular al **Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por**

Infracciones de Tránsito –SIMIT-, para que se pronunciara sobre los hechos génesis del amparo.

2.1.- Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito –SIMIT-

De manera inicial, explicando su objeto legal, indica que funge solo como base de datos de la información reportada por las autoridades de tránsito a nivel nacional.

Agrega que no posee competencia para modificar la información reportada, pues ello está a cargo de los organismos de tránsito locales.

2.1.- Secretaría Distrital de Movilidad

De entrada, precisa que no existe vulneración de derecho alguno, puesto que mediante radicado de salida No. SDC- 202342109711321, dio respuesta a la petición presentada por el accionante. En dicho comunicado, reseña, informó al actor el procedimiento surtido dentro del proceso contravencional.

Por tanto, solicita negar el amparo, pues considera inexistente conducta violatoria de derechos, pues se da la presencia de un hecho superado.

Además de lo anterior, indica que la acción de tutela no es el medio idóneo para debatir decisiones adoptadas dentro del procedimiento contravencional de tránsito, disponiendo para ello de acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

III. CONSIDERACIONES

3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La tutela tiene como dos de sus caracteres distintivos esenciales la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio

irremediable; el segundo puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad, concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.

3.2. DEL CASO EN CONCRETO.

Según los supuestos fácticos que soportan esta acción, el promotor del amparo solicita la protección de su derecho fundamental de petición, y como consecuencia, se le exonere de la orden de comparendo a él impuesta y, además, distinta documentación relacionada con la misma.

Atendiendo lo anterior, recuérdese que la Constitución prevé la posibilidad de elevar peticiones ante entidades públicas o particulares encargados de la prestación de un servicio público servicios públicos. A efectos de garantizar la protección y efectividad del derecho de petición, se exige que la solicitud presentada sea resuelta de manera oportuna. Ante la carencia de tal respuesta, se vería infringida la garantía del art. 23 superior.

Al respecto, también ha reiterado el alto Tribunal Constitucional, a través de sus Salas de Revisión, lo siguiente en cuanto al derecho de petición:

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, o las organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.¹

El derecho de petición escrito, regulado en la Ley 1755 de 2015, estableció los términos a efectos de dar respuesta a una petición así:

Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

¹ Sentencia T 426 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Ahora, ha considerado la jurisprudencia constitucional que la respuesta no es una cualquiera, sino que esta debe reunir unos determinados requisitos, a fin de entenderse como garantizada el derecho fundamental a la petición. Las características en mención, se pueden concluir como oportunidad, resolución de fondo, de manera clara y congruentemente, y que dicha respuesta sea efectivamente notificada a la parte petente; al respecto, la sentencia T 149 de 2013, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, destacó lo siguiente:

4.5.1. En relación con los tres elementos iniciales- **resolución de fondo, clara y congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.** Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

4.5.2. Respecto de la **oportunidad de la respuesta**, como elemento connatural al derecho de petición y del cual deriva su valor axiológico, **ésta se refiere al deber de la administración de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones formuladas.**

[...]

4.5.3. Asimismo, **el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.** Significa que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al interesado.

Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello.

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Descendiendo al caso objeto de estudio, se encuentra plenamente acreditado que el accionante formuló derecho de petición dirigida a la Entidad enjuiciada el 5 de julio de 2023. La solicitud presentada, según su constancia de radicación, estaba dirigida a la revocatoria de la orden de comparendo No. 11001000000035596611.

De igual forma, conforme los documentos obrantes en el plenario, se encuentra demostrado que la Secretaría accionada dio respuesta a dicha solicitud el día 22 de agosto de 2023 a través del oficio SDC-202342109711321, siendo aportada la misma por el señor **Agatón Fandino**.

Dicha respuesta cumple con los requisitos de claridad; resolución de fondo de la petición; precisión y congruencia con la solicitud elevada, de igual manera fue puesta en conocimiento del hoy accionante, por cuanto –como se dijo– fue él mismo quien la aportó como anexo al libelo inicialmente presentado.

Si bien en la respuesta se niega lo relativo a la revocatoria de la orden de comparendo impuesta al actor y, en últimas, del acto administrativo que lo declaró contraventor por haberse surtido en debida forma el trámite contravencional, tal circunstancia no conlleva la vulneración de la garantía consagrada en el art. 23 superior, pues el derecho de petición “[...] *no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la*

*autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa [...]*².

Ahora, adicional a lo anterior, no es la acción de tutela el medio idóneo para controvertir las actuaciones administrativas originadas en la imposición de una orden de comparendo; el carácter subsidiario de este medio sumario constitucional no lo permite.

En primer lugar, las vicisitudes de la notificación deben ser alegadas ante la misma Entidad a través de los recursos de ley o nulidades para, si a ello hubiera lugar, se estudie la legalidad de los enteramientos. En segundo plano, en definitiva, se puede acudir a los medios de control ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para, a través de su ejercicio, cuestionar la actividad de la administración, representada en este caso, por la **Secretaría Distrital de Movilidad**.

Así las cosas, se puede concluir que la tutela es improcedente a fin lograr de la revocatoria de la orden de comparendo No. 11001000000035596611 y, por esa vía también, del trámite contravencional subsecuente. Para ello, como se dijo y se itera, se debe acudir ante la entidad respectiva y, eventualmente, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Bajo este orden de presupuestos, en consonancia con las manifestaciones realizadas por la **Secretaría Distrital de Movilidad**, las cuales se entienden efectuadas bajo la gravedad de juramento, se colige que la petición fue contestada con anticipación a la presentación de la acción y, pese a que dicha manifestación fue adversa a las pretensiones del solicitante, este solo hecho no genera vulneración alguna.

Finalmente, en cuanto la documentación solicitada, está puede pedirse a la accionada a través del uso del derecho de petición. Precizando, al respecto, que no se puede afirmar que con anterioridad se haya requerido, pues no se anexó el escrito radicado el 7 de julio de 2023, a fin de examinarlo y determinar si fue punto de ese documento.

IV. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

² Sentencia T 242 de 1993 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

PRIMERO: Negar la acción de tutela instaurada por **Iván Agatón Fandino** contra la **Secretaría Distrital de Movilidad**, por lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR la notificación de lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y eficaz de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 16 del decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, por secretaría, remítase esta providencia a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, al tenor de lo dispuesto en el Inc. 2 del Art. 31 del Decreto 2591/91.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Jueza,



DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO

DS